DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	**No. Plan de Adquisiciones**	Plan Anual de Adquisiciones 2026
	Consecutivo	N-A
Tipo de Presupuesto Asignado	- Ingresos corrientes de Libre Destinación -SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	
Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Anual de Adquisiciones	FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO DE LAS ACCIONES MISIONALES EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA.	
Registro Banco de Proyectos Código BPIM	202500000045881	
Numero de certificado de compatibilidad del gasto	0300	
Programa, Subprograma y objetivo	PROGRAMA: GOBIERNO TERRITORIAL SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OBJETIVO: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	
DATOS DE LA CONTRATACIÓN		
Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa)	17/07/2026	
Nombre del Secretario de Despacho responsable del Estudio Previo	**FELIPE ANDRES RENGIFO HENAO** Secretario General	
Modalidad de Contratación	**DIRECTA**	
Tipo de Contrato	Prestación de servicios profesionales	**Otro:**

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

El Municipio de Palestina, Caldas, realiza el presente estudio previo y análisis del sector, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en especial lo establecido en la Subsección 1, artículo 2.2.1.1.2.1.1, normas que regulan la planeación y los documentos previos de los procesos de contratación estatal.

La modalidad de selección aplicable al presente proceso es la Contratación Directa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4, literal h) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales podrán contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre que se verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario obtener previamente varias ofertas, dejando constancia escrita de ello por parte del ordenador del gasto.

La contratación directa de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se encuentra expresamente permitida por el ordenamiento jurídico colombiano, como un mecanismo legítimo mediante el cual las entidades estatales pueden atender necesidades específicas, especializadas o temporales, orientadas al cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas, sin que ello implique la creación de una relación laboral.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la contratación directa, aun cuando simplifica ciertas formalidades del procedimiento de selección, no exime a la Administración del cumplimiento de los principios de la contratación estatal, tales como transparencia, economía, selección objetiva y responsabilidad, y debe sujetarse a condiciones objetivas que garanticen su legitimidad.

Dada la importancia de la actividad contractual, el ordenamiento jurídico exige que todo proceso de contratación cuente previamente con condiciones claras, expresas y concretas, que recojan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas a las cuales debe sujetarse el desarrollo del contrato. Los estudios previos constituyen un elemento esencial del proceso contractual, en la medida en que soportan la decisión de contratar y sirven como base para la interpretación, ejecución e integración del contrato, al reflejar la voluntad de la administración a la que se somete el contratista.

Por lo anterior, la decisión de contratar no puede obedecer a la improvisación, la imprevisión o la discrecionalidad de la administración, sino que debe responder a necesidades reales y

debidamente identificadas, orientadas exclusivamente al cumplimiento de los cometidos estatales y del interés público. En consecuencia, los contratos estatales deben corresponder a objetos claramente definidos, acordes con las prioridades institucionales.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2°, establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos y deberes constitucionales, facilitar la participación ciudadana y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, fines que deben orientar toda actuación administrativa, incluida la actividad contractual.

En cumplimiento de dichos fines, todo proceso de contratación debe responder al cumplimiento de los principios constitucionales y estatutarios de la contratación estatal —igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad— y observar las formalidades previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes en materia de contratación estatal.

La Secretaría General tiene a su cargo la función de planear, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar planes y programas orientados a la gestión y desarrollo de las competencias propias de la dependencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional y de los planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. En ejercicio de sus funciones, la Secretaría General es responsable de articular las necesidades institucionales con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo, lo que incluye la contratación de bienes y servicios que resulten necesarios para el cumplimiento de su misión.

Con el transcurso de los años, la entidad territorial ha experimentado un incremento significativo en su participación dentro de procesos judiciales y administrativos, derivados de acciones instauradas por los ciudadanos del Municipio. Dichas acciones, de diversa naturaleza, tienen como finalidad obtener una reparación económica por hechos atribuibles a la administración municipal, ya sea por acción u omisión, así como por actuaciones de las entidades adscritas al Municipio. Esta situación genera un impacto negativo en las finanzas públicas y compromete la sostenibilidad y operatividad de los programas institucionales de la entidad territorial

En virtud de lo anterior, corresponde a la administración municipal garantizar la adecuada representación del ente territorial en todos los procesos en los que intervenga como parte, ya sea en calidad de accionante o de accionado. Dicha representación debe ser ejercida de manera técnica por profesionales en derecho con alta idoneidad, capacitados para diseñar estrategias jurídicas orientadas a la defensa de los intereses que legítimamente le asisten al Municipio. En consecuencia, la actividad de representación judicial y administrativa debe regirse por los principios de oportunidad, proporcionalidad, eficiencia y eficacia, con el propósito de minimizar el riesgo de sentencias adversas a los intereses del organismo territorial, asegurar su defensa y prevenir la configuración de un daño antijurídico.

De otra parte, se advierte el escenario opuesto, obedeciendo a la necesidad del Municipio de acudir en defensa de sus derechos e intereses, evitando la configuración de daños patrimoniales en su contra, siendo esta otra arista en materia de defensa judicial para la entidad territorial, así como la representación y defensa en virtud de los procesos adelantados por los diferentes órganos de control del Estado Colombiano, debiéndose garantizar la interposición de recursos y ejercer el derecho de defensa de manera oportuna y adecuada, cuando los resultados sean contrarios al interés municipal.

En atención a lo expuesto y considerando que la actividad judicial implica una relación de confianza entre el cliente y el abogado, resulta pertinente adelantar un proceso de selección de contratista bajo la modalidad de contratación directa, con el fin de suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales con persona natural o jurídica de reconocido prestigio en el ejercicio de la abogacía y en el ámbito del derecho público en el Departamento de Caldas. Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro de la planta de personal de la administración municipal no existe un cargo ni perfil que pueda asumir dichas funciones. Asimismo, debe resaltarse que la gestión jurídica en toda entidad pública o privada se fundamenta en el principio de confianza y discrecionalidad entre el ordenador del gasto y el abogado, dado que los asuntos jurídicos son de carácter sensible, reservado y con potencial incidencia en la responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal.

A lo sumo, desde el interior de cada una de las secretarías y diferentes dependencias de la administración, se desarrollan actividades de contenido jurídico como son la proyección de actos administrativos; respuesta de oficios de contenido jurídico; emisión de conceptos de carácter legal, entre otras actividades administrativas que conllevan a una orientación o conocimiento especializado en materia legal.

De otro lado, se encuentra la actividad contractual del ente territorial como una de las acciones primordiales para la dinamización de la administración pública, permitiendo a partir de ello su funcionamiento y el cumplimiento de deberes misionales asignados a los municipios por la Constitución y la Ley y, teniendo en cuenta que, la actividad contractual del Estado está reglada por el estatuto de contratación -Ley 80 de 1993-, la Ley 1159 de 2007, entre otras normas, se hace necesario contar con un acompañamiento especializado para el apoyo en todas las etapas del proceso contractual (etapa precontractual, contractual y pos contractual) y en los procesos sancionatorios derivados de esta actividad, en aras de responder a los postulados normativos y a las necesidades reales, haciendo este proceso un pilar transversal a toda la administración para su marcha operativa y funcional, ya que, sin esta actividad, se paralizaría la administración pública.

En igual sentido, se debe contar con un plan de capacitación en temas relacionados con el procedimiento administrativo y asuntos constitucionales cotidianos como lo es el debido proceso, el derecho de petición y la acción de tutela, entre otros asuntos de orden jurídico, los cuales deben responder a criterios de legalidad y al margen normativo aplicable.

Así pues, la Secretaría General y de Gobierno Municipal, tiene como propósito principal, planear, dirigir, coordinar y, ejecutar políticas y estrategias en materia de gobierno, de orden público y administración de justicia para el fortalecimiento, integridad y estabilidad del orden municipal, así como conservar la seguridad de la Jurisdicción del Municipio.

El plan de seguridad y convivencia ciudadana, es aquella herramienta de planeación que contiene todos los lineamientos, medidas y estrategias dirigidas a dar solución a las diferentes problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridades existentes en un determinado municipio

o ciudad; asimismo, es un insumo fundamental para determinar las diversas inversiones que se ejecutarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Otro aspecto importante que garantiza la efectividad del plan de seguridad y convivencia ciudadana, es el seguimiento que se debe realizar al cumplimiento de los objetivos y metas de cada una de las estrategias allí estipuladas, esto con el fin de alinear y gestionar los aspectos administrativos necesarios para poder llevar a cabo los proyectos, realizar el seguimiento a través de los indicadores y el cumplimiento de las metas mensualizadas y determinar el nivel de impacto en el comportamiento de los indicadores de criminalidad en las problemáticas inicialmente identificadas.

1.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC:

CLASIFICACION UNSPSC
• Código UNSPSC 80111600: Servicios de Personal Temporal

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN:

OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA; ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y REPETICIÓN; APODERAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS".

2.1. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES:

2.1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

GENERALES:

1. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en los términos previstos en el Decreto 1273 de 2018, efectuando la afiliación y el pago oportuno de los aportes a salud, pensión y ARL, de conformidad con la normatividad vigente.

2. Ejecutar el objeto del contrato de manera personal, oportuna, eficiente y conforme a las condiciones técnicas, alcance y obligaciones pactadas.
3. Entregar a la entidad estatal los documentos, soportes, informes parciales y finales que acrediten la correcta ejecución del objeto contractual, dentro de los plazos establecidos.
4. Atender las consultas, observaciones, recomendaciones e instrucciones impartidas por el supervisor designado por la entidad contratante, siempre que se encuentren dentro del marco contractual.
5. Abstenerse de divulgar, revelar o utilizar indebidamente la información que llegue a conocer con ocasión de la ejecución del contrato, salvo autorización expresa y escrita de la entidad contratante, incluso después de la terminación del contrato.
6. Cumplir con las normas legales y reglamentarias aplicables, especialmente aquellas relacionadas con el objeto del contrato, así como con los principios de la contratación estatal.
7. Mantener indemne a la entidad contratante frente a reclamaciones, demandas o acciones de terceros derivadas del incumplimiento de obligaciones contractuales, legales o laborales a su cargo.
8. No ceder el contrato ni subcontratar total o parcialmente el objeto contractual sin la autorización previa, expresa y escrita de la entidad contratante.
9. Guardar independencia técnica y administrativa, sin que exista relación laboral con la entidad contratante, ejecutando el contrato con plena autonomía, conforme a su naturaleza jurídica.
10. Las demás obligaciones que le sean asignadas y que guarden relación directa con el objeto del contrato y su correcta ejecución.

ESPECÍFICAS:

1. Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas.
2. Brindar apoyo en la proyección, revisión y conceptualización de actos administrativos que requieran asesoría especializada en temas de derecho administrativo, derecho urbano y derecho policivo.
3. Resolver los asuntos de alta complejidad jurídica que se generen en la entidad territorial, en relación y conexión con el objeto contractual.
4. Brindar apoyo en materia de acciones sancionatorias que se adelanten al interior de las diferentes secretarías de la administración municipal.
5. Asesorar, apoyar y acompañar al comité de conciliación y repetición que sirve a los intereses del Municipio de Palestina Caldas en materia de prevención del daño antijurídico y, asistir a las audiencias de dicho comité y otros menesteres en el desarrollo de su conformación y funcionamiento.
6. Brindar asesoría en la actualización del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.
7. Efectuar asesoría en el cumplimiento de lo dispuesto por el Código Nacional de Convivencia Ciudadana.

8. Realizar capacitaciones en coordinación con la Inspección de Policía Urbana en asuntos relativos con las competencias propias de las autoridades de policía.
9. Brindar capacitaciones en materia de actualización en derecho policivo a la Inspección de Policía del Municipio y corregiduría.
10. Efectuar el apoderamiento y representación judicial del Ente Territorial en los procesos y medios de control que se tramitan y gestionan ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativo, constitucional y arbitral.
11. Cumplir oportuna y diligentemente con las actuaciones judiciales y actividades encomendadas que se deban desarrollar en cada una de las etapas del proceso judicial entre las cuales se encuentran: i.) asistencia a todas las audiencias y diligencias programadas; ii.) atender los requerimientos hechos por la autoridad judicial; iii.) solicitar y aportar las pruebas pertinentes, conducentes y útiles al proceso; iv.) diseñar estrategias de defensa judicial apropiadas para las condiciones del proceso; v.) presentar los escritos, memoriales y demás documentos en forma idónea y oportuna para el cumplimiento cabal de su encargo.
12. Vigilar en forma diligente los procesos judiciales en que sea parte el Municipio.
13. Cumplir con las actividades necesarias para cada etapa del proceso, de manera oportuna y dentro los términos definidos por la Ley o la respectiva autoridad judicial.
14. Asesorar, apoyar y acompañar al Jefe de Control Interno Disciplinario o quién haga sus veces, en las actividades inherentes al funcionamiento y control del régimen disciplinario del Municipio de Palestina Caldas.
15. Solicitar y mantener en su poder la información necesaria para que la entidad contratante pueda revisar las condiciones del proceso judicial, como lo son: i.) copias de las actuaciones procesales; ii.) providencias judiciales; iii.) pruebas aportadas y practicadas y, en general, cualquier información relevante para la supervisión y toma de decisiones por parte de la entidad.
16. Asistir a las audiencias o actos que impliquen la defesa judicial o gestión jurídica del Municipio, previo otorgamiento de poder.
17. Brindar acompañamiento y capacitación en temas de prevención del daño antijuridico y relacionado con la defensa judicial del ente territorial.
18. Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto del contrato.

2.1.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1. Cancelar el valor del contrato al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.
3. Realizar la supervisión del contrato.
4. Liquidar el contrato en la forma convenida o de acuerdo a la Ley.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, para efectos de la contratación de servicios y las ventajas que representa para la entidad, el aspirante a contratar debe estar en condiciones de ejecutar el objeto contractual desde su idoneidad, formación o experiencia y, de acuerdo a las actividades a realizar y la naturaleza del objeto contractual, se analizaron los precios del mercado, valores establecidos para la prestación de servicios en la misma área teniendo en cuenta las particularidades para contratar con el Municipio bajo la entrega de sus servicios de manera sucesiva y prolongada en el tiempo, con pagos contra entrega, que permitan a la entidad ser más eficiente y aplicar la economía en tiempo y en procesos.

Por lo cual se toma como referencia los pagos realizados por honorarios en perfiles profesionales iguales al que se pretende contratar aquí y que otras entidades públicas han cancelado por los similares conceptos, así:

NÚMERO DE PROCESO	OBJETO	TIPO DE PROCESO	ENTIDAD TERRITORIAL	VALOR
PS-002-2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA JURIDICA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO-NORMATIVO, REPRESENTACIÓN JUDICIAL CUANDO HAYA LUGAR, CAPACITACIÓN Y APOYO A LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAMARIA - VILLAMARIA	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONCEJO MUNICIPAL VILLAMARIA CALDAS	$ 19.800.000
CPS-156-2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA INTERNA Y EXTERNA	CONTRATACIÓN DIRECTA	MUNICIPIO DE URIBIA	$ 55.000.000

NÚMERO DE PROCESO	OBJETO	TIPO DE PROCESO	ENTIDAD TERRITORIAL	VALOR
	EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE URIBIA PARA LA VIGENCIA 2026.			
PSP-818-2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EXTERNA AL MUNICIPIO DE GIRARDOT, ESPECIALMENTE EN DERECHO PUBLICO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO INTEGRAL.	CONTRATACIÓN DIRECTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	$ 64.000.000

Con sustento en lo antedicho, se fija el valor del contrato por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($43.725.000) IVA INCLUIDO,** para el pago de los servicios que serán prestados, con respaldo en el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NUMERO CDP	FECHA	CODIGO	FONDO	VALOR
674	15/07/2026	2.1.2.02.02.008.001	1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	$17.500.000
675	15/07/2026	2.3.2.02.02.009.164	1.2.4.3.04-SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	$26.225.000 **TOTAL= $43.725.000**

En la determinación del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL CONTRATISTA, como lo es el pago de las estampillas en los porcentajes fijados por el Estatuto Tributario y en la forma que para ello desde allí se estableció.

4. ANALISIS DEL SECTOR

Dando cumplimiento al estudio del sector que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación Directa, donde indican que el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto. En los presentes estudios previos, se tuvo en cuenta el objeto del contrato, particularmente las condiciones del mismo, como los plazos y formas de entrega y de pago; lo cual permitió sustentar la decisión de hacer una contratación directa, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.

Para efectos del análisis del sector, el presente proceso se ubica dentro del Macro sector Servicios, específicamente en el Sector de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, de conformidad con la clasificación económica aplicable. Lo anterior obedece a que en la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no se generan bienes materiales, sino que se adquieren servicios de carácter intelectual, técnico o especializado, requeridos para el cumplimiento de las funciones misionales, administrativas y de apoyo de la entidad estatal, los cuales pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas que cuenten con la idoneidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual.

El sector terciario de la economía colombiana constituye uno de los sectores de mayor desarrollo y participación en el mercado laboral. De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, este sector concentra más del 80 % de la fuerza laboral del país, lo que evidencia su relevancia en la provisión de servicios requeridos tanto por el sector público como por el sector privado. En términos económicos, el sector terciario comprende las actividades relacionadas con el comercio, los servicios y el transporte, caracterizándose por la prestación y distribución de servicios, a diferencia de los sectores primario y secundario que se enfocan en la producción de bienes.

Dentro de este sector, las actividades profesionales, científicas y técnicas presentan una dinámica de crecimiento sostenido, reflejada en la variación anual de los ingresos nominales reportada por la Encuesta Mensual de Servicios – EMS del DANE, lo que demuestra la existencia de una oferta amplia y diversificada de profesionales y empresas en el mercado. Esta característica permite a las entidades estatales acceder a servicios especializados sin necesidad de adelantar procesos de

selección competitivos cuando la ley autoriza la contratación directa, como ocurre con los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

El subsector de servicios profesionales y de apoyo a la gestión comprende actividades orientadas a brindar soporte técnico, administrativo, operativo y especializado a entidades públicas y privadas. Incluye, entre otros, servicios de consultoría, asesoría, gestión administrativa, contabilidad, derecho, ingeniería, tecnologías de la información, comunicación social, publicidad, planeación, seguimiento, así como servicios de apoyo a la gestión institucional. Este subsector se caracteriza por demandar mano de obra calificada y especializada, y por su flexibilidad para atender necesidades específicas y temporales de las entidades públicas.

5. FORMA DE PAGO:

La cancelación de los valores contratados se efectuará en pagos parciales, de conformidad con el avance y ejecución del contrato, previa suscripción de las actas de supervisión, las cuales se emitirán con base en la entrega y aprobación de los informes de cumplimiento del objeto contractual, a entera satisfacción de la entidad contratante.

Para efectos del pago, el contratista deberá presentar informes parciales o finales, según corresponda, los cuales deberán: Discriminar de manera clara y detallada cada una de las actividades ejecutadas, en concordancia con las obligaciones contractuales y el objeto del contrato y Adjuntar los soportes documentales que acrediten la ejecución de las actividades informadas.

Adicionalmente, cada pago estará condicionado a que el contratista acredite estar al día en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), conforme a lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes al período objeto de cobro.

En todo caso, los pagos se realizarán previa disponibilidad de recursos, y estarán sujetos a la disponibilidad de Tesorería, al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a la programación del gasto que para el efecto establezca la Oficina de Hacienda Municipal, sin que ello genere reconocimiento de intereses, sanciones o indemnizaciones a favor del contratista.

6. PLAZO:

El plazo del CONTRATO será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

7. SUPERVISIÓN:

EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del CONTRATO, por medio de un servidor público designado por el Despacho del Alcalde, quién debe ejercer un control técnico y administrativo sobre el contrato, para lo cual, podrá solicitar informes, evidencias y ampliación o modificación de los informes presentados.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El CONTRATO se ejecutará en el Municipio de Palestina Caldas.

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

MODALIDAD: Contratación Directa – Prestación de Servicios Profesionales y/o apoyo a la gestión

El contrato a suscribir es el de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993.

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, las características de la necesidad a satisfacer, el presente proceso de contratación está sujeto al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, que señala:

"(…) Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las

entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales (…)". (Negrilla y subrayado por fuera del texto original).

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-154 de 1997, declaró exequible el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, precisando que los contratos de prestación de servicios son válidos cuando se celebran para atender necesidades específicas, temporales o especializadas, sin que se configure relación laboral, en la medida en que el contratista actúe con autonomía técnica y administrativa.

Por su parte, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, y su posterior aclaración del 11 de noviembre de 2021, reiteró que la contratación por prestación de servicios no está prohibida por el ordenamiento jurídico, sino que constituye un instrumento legítimo de gestión pública, cuya finalidad es permitir a las entidades atender necesidades institucionales concretas. La corporación enfatizó que lo reprochable no es el contrato en sí mismo, sino su uso indebido para encubrir relaciones laborales, situación que solo se configura cuando concurren los elementos de subordinación, dependencia y permanencia propios de una relación laboral.

En particular, Colombia Compra Eficiente ha precisado que la idoneidad del contratista debe evaluarse en función del objeto y las obligaciones a desarrollar, y que la contratación directa prevista en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 no exige pluralidad de

ofertas, siempre que la entidad deje constancia escrita de la verificación de dicha idoneidad y de la justificación de la necesidad en los estudios previos.

En consecuencia, el marco jurisprudencial y doctrinal vigente respalda la utilización de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como una herramienta legítima de la administración pública, siempre que se encuentren debidamente planeados, justificados, alineados con los fines del Estado y ejecutados con respeto por su naturaleza no laboral.

Finalmente, se deja constancia de que en la planta de personal del Municipio de Palestina-Caldas no existe personal que cuente con el perfil requerido ni con la disponibilidad de tiempo suficiente para desarrollar el objeto contractual, circunstancia que ha sido debidamente verificada y certificada por el Jefe de Personal o quien haga sus veces, lo cual justifica la necesidad de acudir a la contratación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que se celebra mediante contratación directa con la persona natural que demuestre idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, no es necesario obtener varias ofertas, por lo que no procede la aplicación de factores comparativos de selección. La selección del contratista se fundamenta en la verificación de idoneidad, la cual se acredita mediante la formación académica, título profesional y experiencia relacionada directamente con el objeto del contrato, incluyendo experiencia en el sector público cuando sea pertinente, lo que garantiza que el futuro contratista posee las competencias necesarias para asumir las responsabilidades derivadas de la ejecución contractual.

Este criterio está respaldado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha señalado en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 y en los casos Rad. 6615-05 de 2008 y Sala Plena IJ-0039 de 2003, que la contratación de servicios profesionales es válida siempre que se verifique la idoneidad del contratista y que la coordinación con la entidad para el cumplimiento del objeto no configura

subordinación laboral, preservando la naturaleza contractual del vínculo. De igual forma, los lineamientos de Colombia Compra Eficiente (Manual de Contratación y Concepto CCE-183-2019) señalan que, en contratación directa, la idoneidad y experiencia del contratista constituyen el criterio central de selección, sin que sea necesaria la pluralidad de ofertas, siempre que se deje constancia escrita de la justificación de la necesidad y la verificación de competencias en el estudio previo.

11. IDONEIDAD Y/O EXPERIENCIA:

Bajo el entendido que el Municipio de Palestina Caldas no cuenta dentro de su planta de personal o de contar no es suficiente para atender los procesos y las asesorías jurídicas y representación judicial, entre otros.

Dentro de los documentos exigidos al contratista este deberá acreditar experiencia en asesorías jurídicas y representación judicial, por medio de contratos o actas de liquidación con objetos similares al que se pretende contratar.

12. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 el cual indica:

> *"En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. (Decreto 1510 de 2013, artículo 77)".*

Lo anterior dado que en los contratos de Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión los pagos están supeditados a la aprobación del informe de actividades por parte del supervisor, esto es, al cumplimiento de las actividades contractuales, no se exigirá la constitución de pólizas de calidad y cumplimiento.

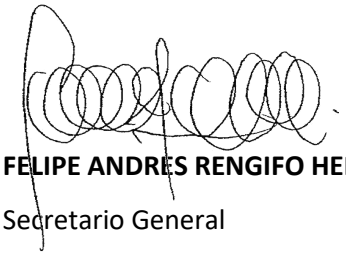
13. ANALISIS DE RIESGO

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el contrato	Entrega inoportuna del servicio contratado	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA100%	Aceptar el riesgo, realizar seguimiento y monitoreo periódico al cumplimiento del contrato.	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha del acta de inicio	Desde la fecha de terminación estipulada	Supervisión mensual	Supervisión mensual

14. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL:

El presente Proceso de Contratación, Si__, No X está sometido a un o varios Acuerdos Comerciales. En atención a que el proceso se adelanta bajo la modalidad de Contratación Directa, y de conformidad con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales no están obligadas a realizar el análisis de aplicación de Acuerdos Comerciales para los procesos de contratación que se adelanten mediante esta modalidad de selección.

Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.



FELIPE ANDRES RENGIFO HENAO
Secretario General